

El lamentable balance de una legislatura

Javier Doz

Presidente de la Fundación 1º de Mayo

CUANDO NOS ESTAMOS ACERCANDO AL FINAL DE LA LEGISLATURA, el ministro Wert ha querido protagonizar una nueva “reforma” educativa, la de ordenación de los ciclos de estudios superiores o “reforma 3+2”. Y consigue lo que parecería buscar: el rechazo completo de toda la comunidad universitaria, de los agentes sociales y de la totalidad de la oposición política. ¿Lo busca en el fondo? ¿Actúa desde la ignorancia de los efectos de sus decisiones? ¿O es demasiado fuerte el poder de los intereses a los que sirve? Sin descartar del todo responder afirmativamente a las dos primeras preguntas, las claves principales de la pertinaz insistencia del ministro Wert en tomar el camino equivocado creo que están en la tercera cuestión.

Las acciones ejecutivas y presupuestarias, las leyes y decretos del gobierno de Mariano Rajoy han estado orientadas a reducir sustancialmente el gasto público en educación, concentrando los recortes en la educación pública; sirviendo a los intereses privados -ideológicos y materiales- en la educación; y favoreciendo la desigualdad.

La desigualdad se ha promovido mediante el recorte del gasto público: disminución de las becas; aumento brutal de las tasas universitarias; y despidos de miles de profesores y reducción de los gastos de funcionamiento de los centros públicos. Todo ello ha afectado a las capas de la población con menos recursos, cuando más necesitaban compensar la disminución de sus ingresos por el paro o la reducción de los salarios. Pero también se promueve la desigualdad ayudando a la expansión de la enseñanza privada y resucitando la pedagogía más rancia y barreras selectivas -como las reválidas- en el desarrollo curricular.

El compromiso llega a su paroxismo en la Comunidad de Madrid

Este compromiso con la desigualdad y contra lo público llega a su paroxismo en la Comunidad de Madrid, que regala prácticamente los terrenos para la construcción de casi un centenar de centros privados -por cierto mediante procedimientos de los que parece lucrarse el cabeza de la “red Púnica” y, entonces, secretario general del PP madrileño, Francisco Granados- mientras que decreta severos recortes y despidos de profesores de la pública. O, manteniendo deducciones fiscales a las familias con recursos, por enviar a los hijos a escuelas privadas, mientras reduce drásticamente el gasto en becas comedor o para libros a las familias más necesitadas.

Estos negativos vectores de la política educativa del PP aparecen en la propuesta del “3+2”: reducirá la financiación de las universidades públicas al reducirse la duración de los grados; favorecerá a las privadas; y producirá más desigualdad. Si Wert, antes de irse, completa su reforma y sustituye las becas por un sistema de créditos, completará su ciclo de ofrendas al dios neoliberal de la desigualdad.

Al tiempo, la Conferencia Episcopal hacía publicar el nuevo currículo de la asignatura de religión que la LOMCE elevó de rango.

El balance de estos cuatro años en educación es tan lamentable que lleva a exigir a los partidos políticos y a los gobiernos que salgan de las elecciones de mayo y noviembre que, como primera medida, desanden todo lo andado. Y que convoquen a los integrantes de la comunidad educativa para hacer de la educación pública y de la igualdad en la educación una de las principales prioridades de la política española.